

“Union ampara y protege al C. Eduardo Gutierrez, representado por el C. Federico Cassina, contra el acto del ciudadano recaudador de contribuciones del Estado, que aplica las disposiciones del Código de procedimientos civiles, á lo que aducen al fisco por contribuciones causadas con anterioridad á la promulgacion de dicho Código, los bienes de la Sra. Mercedes Herrera de Lamadrid.”

Devuélvanse los actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, 15 de Enero de 1875.—*Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO.

Promovido por el C. Lic. Pedro J. Morales, en representacion de D. Luis Zepeda, ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, contra los procedimientos del Juez 3º de letras de la 1ª fraccion judicial del Estado, en virtud de los que, lo mandó poner detenido con guardia en el Hospital civil de Monterey.

PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez 2º suplente de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que este juicio de amparo promovido por el apoderado del Sr. D. Luis Zepeda, quejándose, primero, de que se violaba en la persona de su poderdante, por el juez 3º de letras de la primera fraccion judicial del Estado, con una Orden que expidió este funcionario para que el Sr. Zepeda fuera conducido al hospital civil, con el fin de examinar el estado de sus facultades mentales, la garantía otorgada en el art. 16 de la Constitucion política de la República, por carecer de fundamento legal dicha Orden, y haciéndose extensiva despues la queja, á que con los procedimientos ulteriores de aquel funcionario, se han violado tambien en perjuicio del mismo Sr. Zepeda las garantías que se consignan en los arts. 8, 11, 14, 19 y 20 de la misma Constitucion de la República. Se ha mandado que conforme á la ley de la materia, permanezca este juicio á disposicion de las partes en la secretaría del juzgado, á fin de que puedan sacar los apuntes que les convenga, para formular sus respectivos alegatos, una vez cerrado ya el término probatorio en él concedido. En esta virtud, pasa el que suscribe á esponer por vía de alegato, lo muy poco que cree conveniente añadir á su anterior pedimento.

Durante el término de prueba, el quejoso justificó, entre otros hechos, los de que su poderdante es vecino de la ciudad del Saltillo y que allá las autoridades judicia-

los, algunos facultativos que lo examinaron y generalmente las personas que lo conocen y tratan de cerca, lo consideran en su cabal juicio, tanto que se le admite á litigar personalmente ó por medio de apoderado, ante los tribunales de aquel Estado, y se celebran con él contratos, sin que ni en estos, ni en ningunos otros actos de la vida, se le advierta nada que pudiera indicar alteracion en sus facultades mentales, advirtiéndose entre las pruebas de la misma parte, una declaracion judicial sobre que el citado Sr. Zepeda no necesita curador. Todo esto está indicando, que segun aparece en este expediente, el Sr. Zepeda, estando en su entero juicio, y no declarado prófugo, pues ni motivo resulta para ello, no puede nombrársele curador; pero aun en el supuesto de que así no fuera, y de que tal nombramiento procediese de derecho, por haber razones bastantemente acreditadas, no es el señor juez tercero de letras quien debe hacerlo, porque si el quejoso tiene su domicilio y vecindad en la ciudad del Saltillo, como lo ha justificado, al juez ordinario de allí y no á ninguno otro encomienda el derecho aquella facultad, como lo sostienen los autores y está expresamente mandado en las leyes 19 tít. 4º part. 5ª y 12 tít. 16 part. 6ª; así es que con la orden expedida por el citado señor juez para que el quejoso fuese conducido al hospital civil y con sus otros procedimientos encaminados á hacer el nombramiento de curador por causa de locura, se violan patentemente las garantías que se consignan en la segunda parte del art. 14 y en el 16, porque el tribunal establecido por la ley para los casos de esta naturaleza, es el juzgado ordinario de la ciudad del Saltillo, siendo incompetente cualquier otro, y procediendo en consecuencia el recurso interpuesto por la violacion de las citadas garantías; pero no sucede lo mismo respecto de las otras cuya violacion tambien se alega, pues en cuanto á la del art. 8º, por no haberse proveido un escrito de recusacion presentado por el

mismo quejoso, nada se justificó; no se le exige esta de seguridad, pasaporte, salvo conducto ó otro requisito semejante, que es el caso del art. 11: su detencion no es por causa de delito, ni tampoco se le sigue juicio alguno criminal, para que pudieran alegarse las violaciones de los arts. 13 y 20. En consecuencia, el Promotor cree que el recurso de amparo no procede por la violacion (porque no existe) de los citados arts. 8º, 11, 19 y 20 constitucionales, por lo que fundado en los 101 y 102 del pacto fundamental de la República y en el 1º fraccion 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869, concluye proponiendo al juzgado declarar:

Que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Luis Zepeda, contra los efectos de la orden del ciudadano juez tercero de letras, en virtud de la que se le mandaba conducir al hospital civil, y contra sus ulteriores procedimientos encaminados á nombrarle curador por causa de locura, por la violacion de los arts. 14 y 16 de la Constitucion política de 1857.

Monterey, 18 de Setiembre de 1874.—
Lic. S. Roel.

El dictámen á que se refiere el anterior es el siguiente:

«C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que decretada por vd. la suspension de la orden que el ciudadano juez tercero de letras expidió el 24 del pasado, para que el Sr. D. Luis Zepeda fuera conducido al hospital civil á efecto de que pudiera ser examinado convenientemente por facultativos, para que fijaran el estado moral de sus facultades, ha pasado de nuevo al que suscribe, para pedir en cuanto á lo principal, en este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Pedro J. Morales, como apoderado del Sr. Zepeda, contra la referida orden de 24 del pasado, por creer violadas en la persona de su poderdante algunas de las garantías otorgadas al hombre en el pacto fundamental de la República.

En el primer escrito presentado por el apoderado del quejoso en este juicio, solo se alegaba la falta de fundamento de la orden contra la que se promovía, y en esa única razón se apoyaba la queja por la violación de la garantía del art. 16: el Promotor que no tuvo á la vista el cuaderno á que se refiere el auto de suspensión y que por otra parte consideró que los justificantes remitidos en su primer informe por el ciudadano juez de letras, bastaban para fundar su orden, no vaciló en opinar en contra de la suspensión solicitada, y si aun ahora la queja de amparo solo reconociera por fundamento el alegado en el citado primer escrito, es decir, lo infundado de la orden, desde luego terminaría su pedimento proponiendo su denegación, porque lo expuesto por el juez y probado con su informe y justificantes respectivos, demuestran la existencia del fundamento negado por la parte. Mas posteriormente el Sr. Lic. Morales ha ocurrido en forma ampliando los fundamentos de su queja: ya no es solo lo infundado de la orden lo que la motiva; ahora se asegura que con dicha orden y con los procedimientos del juez, se violan en la persona del Sr. Zepeda las garantías que se consignan en los arts. 8º, 11, 14, 19, 20 y en la primera parte del 16 de la Constitución general; así es que convendrá examinar estos nuevos fundamentos.

Desde luego se advierte, que por lo que toca á la primera de estas garantías que se dicen violadas, fuera del dicho del quejoso, nada absolutamente obra en el juicio que justifique la violación, que se hace consistir en que, habiendo presentado el Sr. Zepeda un escrito de recusación ante el juez por cuya orden pide amparo, no se le había notificado proveído alguno, y por esto se abstiene por ahora el Promotor de emitir su opinión en cuanto á ella, reservándose hacerlo si llegase á rendirse alguna prueba.

No hay en el caso violación de los arts. 19 y 20; porque ellos se refieren á indici-

dos ó acusados por algún delito, y al Sr. Zepeda, si se le ha mandado guardar en el Hospital, no ha sido porque se le considerara comprendido en alguno de estos casos, sino por mera precaución y con un objeto hasta cierto punto laudable, como que se desea evitar el que cause males ó le causen, y sobre todo con su guarda se pretende lograr que los facultativos puedan examinarlo y fijar el estado de sus facultades mentales; según se advierte por las constancias que hasta ahora se registran en el juicio, con lo que no puede decirse ciertamente que se violan en su perjuicio las garantías de los arts. 19 y 20 de la Constitución.

Mas no sucede lo mismo con las que otorgan los arts. 14 y 16. El juez del domicilio ó del lugar en que ha nacido aquel á quien se trata de nombrar tutor ó curador, cuando hay razón para ello, es el competente para hacer tales nombramientos, según derecho, y él sin duda es también el solo competente para la calificación del estado mental de una persona, cuando por locura ó otra causa semejante se trata de darle curador: así es que siendo el Sr. Zepeda vecino del Saltillo, el juez de aquella ciudad es el encargado por la ley para conocer y decidir en cuanto á la enagenación mental que se le atribuye, y al estar procediendo á ello el señor juez tercero de letras de esta capital, lo está haciendo sin jurisdicción bastante, ó lo que es lo mismo, carece de competencia para tal procedimiento y no es el tribunal ó juzgado que la ley ha establecido para casos semejantes, con lo que se contraviene á los citados arts. 14 y 16.

Por consiguiente y á reserva de ampliar sus razonamientos, si el juzgado creyere necesario conceder á las partes algún término probatorio, concluye el Promotor con la proposición siguiente, fundándose en el art. 1º, frac. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Única. La Justicia de la Unión ampa-

ra y proteje al C. Luis Zepeda contra los efectos de la Orden de 24 de Julio próximo pasado expedida por el C. juez tercero de letras, por violarse los arts. 14 y 16 de la Constitucion federal.

Monterey, 14 de Agosto de 1874.—Lic. *S. Roel*.

Es copia que certifico. Monterey, Setiembre 29 de 1874.—Lic. *S. Roel*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Monterey, Setiembre 25 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el Lic. D. Pedro J. Morales, en representacion de D. Luis Zepeda, contra el acto del ciudadano juez 3º de letras de la 1ª fraccion judicial del Estado, en virtud del cual lo mandó poner detenido con guardia en el hospital de esta ciudad, mientras practicaba, segun dice, unas diligencias relativas á fijar el estado moral del expresado Sr. Zepeda; el informe de la autoridad ejecutora, con los documentos que acompañó: el dictámen del ciudadano promotor fiscal, las pruebas aducidas por el promovente, y lo demas que aparece de autos.

Considerando: que es un hecho constante y bien justificado, que D. Luis Zepeda, permaneció detenido primero en su alojamiento por tres dias y luego en el hospital de esta ciudad por seis, con guardia, de Orden del ciudadano juez 3º de letras de la 1ª fraccion judicial del Estado, sin que hubiera razon que fundara el procedimiento, porque los temores que abrigaba la familia del Sr. Zepeda, que fue la que solicitó la detencion, no pueden estimarse justos ni legítimos, habiendo como hay, pruebas plenas, perfectas y convincentes de que no existe alteracion ni trastorno en las facultades mentales del quejoso: que los términos en que está concebido el art. 19 de la Constitucion de la República, son absolutos y no admiten limitacion ni restriccion de ninguna especie, por lo que no cabe duda que ha sido violada en la persona de D.

Luis Zepeda, la garantía que otorga dicho artículo constitucional, cuando previene que ninguna detencion puede exceder de tres dias sin que se justifique con un auto motivado de prision y los demas requisitos de la ley: que ademas aparece igualmente violada la garantía que establece el art. 16 de la misma Constitucion, supuesto que el ciudadano juez 3º de letras de la 1ª fraccion judicial, se avocó el conocimiento de un negocio que indudablemente no le correspondia resolver, por razon de que las personas que figuran en él, son como está bien probado, de ajena jurisdiccion, y por consiguiante la autoridad judicial del Estado nada tiene que hacer respecto de ellas, principalmente si se atiende á que la cuestion ahora suscitada, fué resuelta ya por las autoridades del Saltillo, en donde vive y tiene su domicilio el quejoso y su familia, como consta del testimonio que se registra desde la foja 44 hasta la 62 de estos autos, y por las dos aclaraciones de los comandantes de policia, D. José M. Valdés y D. José M. Quiroz. Por estas consideraciones, de acuerdo en lo principal con la opinion del señor fiscal y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion de la República y el art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union ampara y proteje al C. Luis Zepeda contra los actos del ciudadano juez 3º de letras de la 1ª fraccion judicial del Estado, en virtud de los que lo mandó poner detenido en el hospital de esta ciudad y lo nombró curador que lo representara como si estuviera demente.

Notifiquese esta sentencia á las partes, sáquese copia de ella para su publicacion en el periódico oficial del Estado, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El C. Lic. Trinidad Gonzalez Doria, Juez de Distrito 2º suplente, así lo decretó, mandó y firmó por ante mí. Doy fé:—Lic. *T. Gonzalez Doria*. —*Pablo Borrego*.

Es copia que certifico.—Monterey, Se-

tiembre 29 de 1874.—*Pablo Borrego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 5 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Pedro J. Morales en representación de D. Luis Zepeda, ante el juzgado de Distrito de Nuevo-León, contra los procedimientos del juez 3º de letras de la 1ª fracción judicial del Estado, en virtud de los que lo mandó poner detenido con guardia en el hospital civil de Monterrey, mientras se practicaban las diligencias respectivas para fijar el estado moral del mismo C. Zepeda, alegando que con estas providencias se infringen las garantías que reconocen los arts. 8, 11, 16, 19 y 20 de la Carta fundamental de la República, en virtud de no ser vecino de Monterrey sino del Saltillo, cuyas autoridades han prevenido en el conocimiento del juicio que dio origen á estas providencias solicitadas por los parientes del mismo Sr. Zepeda. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado, el pedimento del ciudadano promotor fiscal, las pruebas rendidas, lo alegado por el promovente, la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente y

Considerando: que la incompetencia que se alega en las autoridades judiciales de Monterrey, no es de la que habla el art. 16 constitucional, y por consiguiente la presente queja no ha podido ser materia de amparo. Que respecto al art. 19 tampoco procede el amparo, porque la detención que ha sufrido el Sr. Zepeda no ha sido por causa de delito alguno ni para averiguarlo, sino como una medida preventiva de parte de la autoridad.

Que respecto á las referencias de los demás artículos que se citan, son inconducentes. Se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el juez

2º suplente de Distrito del Estado de Nuevo León, que otorgó el amparo al quejoso.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Tomo.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron:—*José M. Iglesias*—*M. Auza*—*Juan J. de la Garza*—*José Arteaga*—*Ignacio Ramírez*—*M. de Oastañeda y Nájera*—*L. Velasquez*—*M. Zavala*—*José García Ramírez*—*Luis M. Aguilar*—secretario.

Es copia que certifico.—México, Diciembre 14 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por Nemesio García y Matías Arellano, contra los procedimientos del jefe político de Villanueva, que los detiene arbitrariamente, sin consignarlos á ningún juez, habiéndose pasado con exceso el término legal, sin que se haya dictado contra ellos el auto motivado de prisión.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano juez de Distrito.

Con fecha 16 del corriente mes, Nemesio García y Matías Arellano, solicitaron el amparo de la justicia federal, porque aprehendidos por el Presidente Municipal de Huanusco y consignados al ciudadano jefe político de Villanueva, en el curso de mas de un mes ni se les ha hecho saber el